El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

**TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / PROCEDE SOLO ANTE EXPECTATIVA LEGÍTIMA.**

En este asunto, Darío Marín González dirigió su reclamo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se resuelva favorablemente su petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, desechada por cuanto no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la ley 100, para acceder a ella. (…)

Respecto a la subsidiaridad, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales…

La Corte Constitucional en la sentencia T-376 de 2011, reiterada en la Sentencia T-716 de 2015, precisó que:

“La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el proceso ordinario laboral, debido a su duración y a los costos económicos que implica, no resulta idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que, como el actor, han sido calificadas como inválidas y a quienes les ha sido negada su pensión de invalidez…”

Esta Sala, al tenor de lo enseñado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sido del consolidado criterio de que se debe ordenar el reconocimiento de una pensión de invalidez, aplicando el principio de condición más beneficiosa, cuando el solicitante acredita haber cumplido a cabalidad los requisitos de un régimen pensional anterior al vigente en la actualidad.

Así, y a manera de ejemplo, se recuerda un caso en el que se le ordenó a la Administradora de Pensiones, reconocerle la pensión por invalidez a una persona que había cotizado 531 semanas durante el periodo comprendido entre los años 1969 y 1984, en el entendido de que, durante ese lapso de tiempo, reunió los requisitos consagrados en el Decreto 232 de 1984 que modificó el 3041 de 1966, vigente durante la época en que se efectuaron los aportes, que establecía que tenía derecho a la jubilación por invalidez quien, habiendo probado ser inválido, hubiera cotizado 300 semanas en cualquier tiempo .

Sin embargo, distinto a lo que ocurrió en ese caso, aquí el señor Marín González, solo cotizó 89 semanas durante el tiempo en que estuvo vigente esa legislación que permitía la jubilación con “(…)300 semanas de cotización en cualquier época.”; en el de marras, el grueso de las cotizaciones del accionante, sucedieron durante la vigencia del artículo 1° de la Ley 860 del 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993…

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA**

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo

Pereira, marzo nueve de dos mil veintiuno

Expedientes: 66001310300320200017001 Acta Nro. 103 del 9 de marzo de 2021

Sentencia Nro. TSP. ST2-0056-2021

Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por la parte demandante contra la sentencia del 30 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, en esta acción de tutela que, por conducto de apoderado judicial, **Darío Marín González** promovió frente a **COLPENSIONES**, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

**ANTECEDENTES**

Narró, en síntesis, que cuenta con 72 años de edad y padece varias afecciones de salud que afectan su calidad de vida, siendo calificado, en consecuencia, con el 51,83% de pérdida de capacidad laboral -PCL- por enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del 13 de julio de 2018.

Así las cosas, le solicitó a Colpensiones reconocerle su pensión de invalidez, sin embargo, la subvención fue negada, en primera y segunda instancia, con el argumento de que no acreditó haber cotizado 50 semanas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez.

Aseguró, entonces, que la entidad accionada vulneró sus garantías fundamentales pues dejó de lado que él es una persona sumamente enferma de avanzada edad, y que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en casos como el suyo, donde el solicitante padece enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, se debe tomar como fecha de estructuración, el día en que cotizó por última vez al sistema.

Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones reconocerle la pensión de invalidez a partir del 31 de enero de 2013, momento en el cual cotizó por última vez al sistema.[[1]](#footnote-1)

Con auto del 14 de octubre del 2020, el Juzgado de primer grado le dio impulso a la acción con la citación de las dependencias de Colpensiones que resolvieron en primera y segunda instancia la solicitud de pensión del actor.[[2]](#footnote-2)

Compareció la Dirección de Acciones Constitucionales de la entidad para explicar que el señor Marín González no cuenta con semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez. Agregó que en el caso del actor es impertinente aplicar el principio de la condición más beneficiosa, comoquiera que la invalidez no se produjo durante el 29 de diciembre del 2003 y el 29 de diciembre del 2006; además indicó que, si las enfermedades del actor fueran progresivas, congénitas o degenerativas, tampoco habría lugar a reconocerle la prestación, en el entendido de que, en ese evento, tendría que tomarse como fecha de estructuración, la fecha de emisión del dictamen, y el accionante tampoco acredita semanas en los 3 años anteriores a la experticia, cuya emisión sucedió el 1° de abril del 2020. Al margen de lo explicado, adujo que la demanda desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela, por lo que solicitó declararla improcedente.[[3]](#footnote-3)

Sobrevino el fallo de primer grado que coincidió en la improcedencia alegada por la demandada.[[4]](#footnote-4)

Impugnó el demandante, insistiendo en que su avanzada edad, sus condiciones de salud y sus precarias condiciones económicas, hacen procedente la demanda.[[5]](#footnote-5)

**CONSIDERACIONES**

La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en determinados casos.

En este asunto, Darío Marín González dirigió su reclamo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se resuelva favorablemente su petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, desechada por cuanto no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la ley 100, para acceder a ella.

La legitimación en la causa por activa se cumple, comoquiera que fue en favor del accionante que se elevó la solicitud pensional que fue negada por la entidad accionada, de donde se hace derivar la presunta vulneración; y por pasiva también, comoquiera que está vinculada al juicio la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones, que fue la dependencia que resolvió en segunda instancia la solicitud prestacional del accionante.

La inmediatez también se supera, pues la demanda se radicó el 14 de octubre del 2020[[6]](#footnote-6) y la última resolución del procedimiento administrativo que aquí se analiza, se profirió el 6 de octubre de ese mismo año[[7]](#footnote-7); como se ve, al amparo se acudió con la perentoriedad que demanda la judicatura.

Respecto a la subsidiaridad, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales. También se ha hecho énfasis en que, por regla general, este amparo es improcedente para el reconocimiento de derechos de raigambre laboral, a menos que se den unas condiciones fijadas por Corte Constitucional, que en la sentencia SU-442 de 2016 explicó que:

La acción de tutela es procedente si se emplea cuando (i) el actor no dispone de otro medio judicial de defensa; o (ii) existen otros medios de defensa judicial, pero es necesaria la tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable;[[8]](#footnote-8) o (iii) los recursos disponibles no son idóneos o eficaces, toda vez que su sola existencia formal no es garantía de su utilidad en el caso concreto. En este último caso, la determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe obedecer a un análisis abstracto y general. Es competencia del juez constitucional examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene el otro instrumento de protección.[[9]](#footnote-9) Y para determinar esto último la jurisprudencia de esta Corte ha señalado dos pautas generales: primero, debe verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si son expeditos para evitar un perjuicio irremediable.[[10]](#footnote-10)

Requisitos que, ciertamente, se hallan cumplidos en la presente acción, si se tiene en cuenta que el accionante, de avanzada edad, presenta una condición de invalidez, que fue calificada por la Junta Regional de Calificación, con el 51,83% de pérdida de capacidad laboral; además, lo que alega, precisamente, es la afectación de su mínimo vital, lo cual no fue contrariado por la Colpensiones; en adición, ha intentado infructuosamente obtener la prestación deprecada y debido a su edad y su expectativa de vida, el proceso judicial no resulta idóneo para la efectiva protección de sus derechos.

La Corte Constitucional en la sentencia T-376 de 2011, reiterada en la Sentencia T-716 de 2015, precisó que:

“La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el proceso ordinario laboral, debido a su duración y a los costos económicos que implica, no resulta idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que, como el actor, han sido calificadas como inválidas y a quienes les ha sido negada su pensión de invalidez, ya que sus condiciones y la ausencia de la prestación referida implican, de entrada, una afectación a la salud y al mínimo vital del peticionario”.

Es decir, que la subsidiariedad reclamada por el juzgado, se viene a menos.

Dicho lo cual, es oportuno enfilar el asunto por el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez, como se propone.

Sobre el tema ha insistido la Corte, como se lee en la sentencia antes citada[[11]](#footnote-11) y más recientemente, en la sentencia T-086 del 2018, en la que arribó a esta síntesis:

19. Ahora bien, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconocen el principio de la condición más beneficiosa. Sin embargo, el alcance de este principio fue un motivo de desacuerdo jurisprudencial. Durante varios años, la Corte Constitucional utilizó mayoritariamente la tesis amplia[[12]](#footnote-12) de la condición más beneficiosa, según la cual es posible aplicar cualquiera de los tres regímenes que han regulado el derecho a la pensión de invalidez sin límite de tiempo. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene una tesis restrictiva[[13]](#footnote-13), de la que se desprende que la norma aplicable es la inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez.

**La Corte Constitucional zanjó esta discusión en la sentencia SU-442 de 2016 previamente referida. Esta providencia determinó que una solicitud de reconocimiento pensional puede examinarse conforme a las normas anteriores a la que se encontraba vigente cuando se estructuró una pérdida de capacidad laboral igual o mayor del 50%, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa. Con respecto a su alcance en el tiempo, esta Corporación determinó que la condición más beneficiosa en pensiones de invalidez no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo el cual el afiliado o beneficiario haya generado una expectativa legítima conforme a la jurisprudencia. Así mismo, estableció lo siguiente:**

*“Por lo demás, una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la pensión de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, no puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo, a menos que se ofrezcan razones poderosas suficientes que muestren que: (i) la nueva posición tiene mejor sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad de trato que están a la base del respeto al precedente constitucional, y (iii) está en condiciones de desvirtuar la prohibición de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales, establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.”*

20. Adicionalmente, la referida sentencia realizó algunas precisiones sobre la aplicación de la condición más beneficiosa y reiteró la concepción de *“expectativa legítima”*. En particular, estableció que, en casos de pensiones de invalidez, sólo es posible aplicar la condición más beneficiosa a un usuario que tenía una expectativa legítima bajo una norma anterior.

Para mostrar la aplicación de la condición más beneficiosa, dicha providencia reiteró el proceso llevado a cabo en las sentencias T-569 de 2015[[14]](#footnote-14)y T-065 de 2016[[15]](#footnote-15) de la siguiente manera:

a)   el supuesto fáctico parte del caso de un usuario del sistema general de pensiones que cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en vigencia de alguna de las dos normas anteriores a la Ley 860 de 2003;

b)   la legislación en la que cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez es derogada sin contemplar un régimen de transición;

c)    el cambio de legislación hizo más gravosa la situación del usuario, en la medida en que con la nueva normativa no cumple con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez;

d)  con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo régimen, el usuario solicita el reconocimiento de una pensión de invalidez;

e)   el usuario no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003;

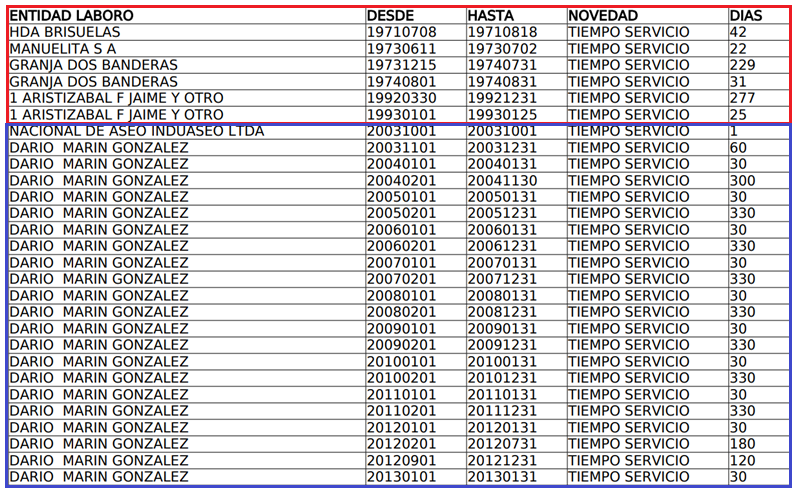
**Con fundamento en lo anterior, la Corte aplicó la condición más beneficiosa bajo el argumento de que el peticionario tenía una expectativa legítima, debido a que había cumplido con los requisitos establecidos para acceder a la pensión en alguna de las legislaciones anteriores**.

En consecuencia, se evidencia que la jurisprudencia de esta Corporación ha aplicado la condición más beneficiosa exclusivamente en aquellos casos en los que una persona cumplió con los requisitos de un régimen derogado para acceder a la pensión de invalidez y en ausencia de un régimen de transición, con fundamento en que se han defraudado sus expectativas legítimas de acceder a una pensión dentro de un régimen que perdió vigencia.

21. En conclusión, para aplicar el principio de la condición más beneficiosa es necesario que la persona que busca el reconocimiento de una pensión de invalidez: (i) **cumpla con los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación en un régimen derogado, lo que se constituye como una expectativa legítima de acogerse a él;** y (ii) no cumpla con las exigencias requeridas en el nuevo régimen, el cual dejó sin efectos al anterior sin contemplar un régimen de transición para sujetos que hubieran cumplido con las condiciones previas.” (Se destaca)

En el caso concreto se tiene que la fecha de estructuración de la invalidez del accionante, que asciende al 51,83%, es el 13 de julio del año 2018, según lo determinó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda[[16]](#footnote-16).

De los actos administrativos que expidió Colpensiones, se observan las siguientes cotizaciones:



Como se ve, cotizó 626 días[[17]](#footnote-17) (89 semanas aprox.) durante el periodo comprendido entre julio del año 1971 y enero de 1993. Asimismo, es visible que el resto de sus aportes (467 semanas aprox.), sucedieron entre enero de 2003 y enero de 2013.

Esta Sala, al tenor de lo enseñado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[[18]](#footnote-18), ha sido del consolidado criterio de que se debe ordenar el reconocimiento de una pensión de invalidez, aplicando el principio de condición más beneficiosa, cuando el solicitante acredita haber cumplido a cabalidad los requisitos de un régimen pensional anterior al vigente en la actualidad.

Así, y a manera de ejemplo, se recuerda un caso en el que se le ordenó a la Administradora de Pensiones, reconocerle la pensión por invalidez a una persona que había cotizado 531 semanas durante el periodo comprendido entre los años 1969 y 1984, en el entendido de que, durante ese lapso de tiempo, reunió los requisitos consagrados en el Decreto 232 de 1984 que modificó el 3041 de 1966, vigente durante la época en que se efectuaron los aportes, que establecía que tenía derecho a la jubilación por invalidez quien, habiendo probado ser inválido, hubiera cotizado 300 semanas en cualquier tiempo[[19]](#footnote-19).

Sin embargo, distinto a lo que ocurrió en ese caso, aquí el señor Marín González, solo cotizó 89 semanas durante el tiempo en que estuvo vigente esa legislación que permitía la jubilación con *“(…)300 semanas de cotización en cualquier época.”*; en el de marras, el grueso de las cotizaciones del accionante, sucedieron durante la vigencia del artículo 1° de la Ley 860 del 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que determina que *“(…) Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que (…) sea declarado inválido y (…) que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.”;* siendo evidente que durante los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha estructuración, el accionante no realizó ningún aporte.

Ahora bien, es cierto que, eventualmente, como apunta el impugnante, el juez de tutela puede tomar como fecha de estructuración de la invalidez, una distinta a la establecida en el dictamen de pérdida de capacidad laboral; sin embargo, para que así suceda, en el expediente tiene que estar probado con suficiencia que el solicitante perdió su capacidad para laborar en una calenda distinta a la estipulada en la experticia.

Es así que, de manera extraordinaria, puede asumirse como fecha de estructuración, por ejemplo, (i) El día en que el solicitante realizó su última cotización al sistema, cuando queda acreditado que la persona perdió su capacidad para laboral antes de la estructuración establecida en la experticia; o también, (ii) El día en que se emitió el dictamen de pérdida de capacidad laboral, cuando logra determinarse que la persona pudo seguir trabajando y cotizando con posterioridad a la calenda establecida en la experticia. No obstante, en este caso, esa circunstancia estuvo lejos de quedar acreditada.[[20]](#footnote-20)

En efecto, en el expediente, en el que es inexistente la historia clínica del actor, aparecen las siguientes anotaciones en el dictamen emitido por la Junta Regional de Invalidez de Risaralda:

1. *“Labora como conductor de maquinaria agrícola”.[[21]](#footnote-21)*

1. *Sustentación fecha de estructuración y otras observaciones: Se estructura la fecha de invalidez cuando se reporta la agudeza visual realizada por oftalmólogo que otorga porcentaje de 45% que sumado a los porcentajes dados para trastorno depresivo recurrente y EPOC por espirometría, le permiten alcanzar el estado de invalidez, posteriormente se establece compromiso vascular arterial de miembros inferiores que suma porcentaje a una persona ya en estado de invalidez.*

***Antes de esta fecha el porcentaje que otorga el EPOC acuerdo a espirometría del 23/06/2015 sumado al trastorno depresivo, por si solas no le permiten alcanzar el 50% o más de pérdida de capacidad laboral antes de la fecha 13/07/2018 y no había otra patología con evidencia para tener en cuenta en la calificación.*** (Destaca la Sala)[[22]](#footnote-22)

Esas anotaciones plasmadas en dictamen, hacen lucir endebles las declaraciones extrajucio que se aportaron con la demanda y en las que se alude que el accionante vive hace 9 años con su hermano, de quien depende económicamente, máxime cuando en ellas no se establece con precisión ni claridad, desde cuándo el señor Marín González perdió la capacidad para trabajar[[23]](#footnote-23).

En suma, son inexistentes razones para estimar que, en el presente asunto, deba darse aplicación al principio de condición más beneficiosa, o para concluir que la fecha en la que se estructuró la invalidez del actor, sea una distinta a la establecida en el dictamen de pérdida de capacidad laboral que se adosó al cartulario.

Por lo dicho, pero por las razones aquí expuestas, se confirmará la sentencia de primer grado, en la que no se tutelaron los derechos invocados por el actor.

**DECISIÓN**

Por lo expuesto, **la Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, por las razones aquí expuesta, **CONFIRMA** la sentencia impugnada.

Notifíquese esta decisión a las partes y demás interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso, archívese.

Los Magistrados,

**JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO**

**ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ**

**DUBERNEY GRISALES HERRERA**

1. Documento 04, C. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Documento 05, C. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Documento 07, C. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Documento 09, C. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Documento 11, C. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Documento 02, C. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pág. 19, Documento 07, C. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. El perjuicio irremediable es un daño a un bien que se deteriora irreversiblemente hasta el punto en que ya no puede ser recuperado en su integridad. No siendo todo daño irreparable, el perjuicio al que aquí se alude debe ser (i) inminente; (ii) grave; (iii) requerir de medidas urgentes para su supresión, y (iv) demandar la acción de tutela como una medida impostergable. Por inminencia se ha entendido algo que amenaza o que está por suceder prontamente. Es decir, un daño cierto y predecible cuya ocurrencia se pronostica objetivamente en el corto plazo a partir de la evidencia fáctica y que justifica la toma de medidas prudentes y oportunas para evitar su realización. Así pues, no se trata de una simple expectativa o hipótesis. El criterio de gravedad, por su parte, se refiere al nivel de intensidad que debe reportar el daño. Esto es, a la importancia del bien jurídico tutelado y al nivel de afectación que puede sufrir. Esta exigencia busca garantizar que la amenaza o violación sea motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y diligente. El criterio de urgencia, por otra parte, está relacionado con las medidas precisas que se requieren para evitar la pronta consumación del perjuicio irremediable y la consecuente vulneración del derecho. Por esta razón, la urgencia está directamente ligada a la inminencia. Mientras que la primera alude a la respuesta célere y concreta que se requiere, la segunda hace referencia a la prontitud del evento. La impostergabilidad de la acción de tutela, por último, ha sido definida como la consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el entendido de que un amparo tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz e inoportuno. Sobre los elementos constitutivos del perjuicio irremediable se pueden ver las consideraciones hechas en las siguientes Sentencias: T- 225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-761 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-424 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-206 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras. [↑](#footnote-ref-8)
9. El artículo 6 numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 ofrece un desarrollo admisible de la Constitución Política, y de acuerdo con su texto, la disponibilidad de dichos medios debe ser *“apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”* (Dcto 2591 de 1991, art. 6.1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En esa ocasión, la Corte debía definir si una acción contenciosa era eficaz para resolver una determinada pretensión, y concluyó que no lo era. Por esa razón, juzgó que la acción de tutela debía considerarse el medio de defensa idóneo. En ese contexto definió los criterios para determinar si los otros medios de defensa judicial, distintos a la tutela, son eficaces. Lo hizo en el siguiente sentido: “[…] En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone.  Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”. [↑](#footnote-ref-10)
11. También en las sentencias T- 190, T-235 y T-295 de 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sentencia T-774 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas; Sentencia T-137 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 11 de noviembre de 2015. Radicado 54093. M.P. Luis Gabriel Miranda. [↑](#footnote-ref-13)
14. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [↑](#footnote-ref-14)
15. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pág. 19, Documento 04, C. 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sumatoria de los días del recuadro rojo. [↑](#footnote-ref-17)
18. Por ejemplo, la Sentencia T-703 del 2017 [↑](#footnote-ref-18)
19. TSP, Sentencia del 24 de abril de 2019, Rad. 2019-00014-01, M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo. [↑](#footnote-ref-19)
20. Así se explica con detalle en las sentencias T-235 de 2015 y SU-588/16 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pág. 19, Documento 04, C. 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pág. 22, Documento 04, C. 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Págs. 47 a 52, Documento 04, C. 1. [↑](#footnote-ref-23)